

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece doña Macarena Bravo Vega, en representación de ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A., Institución de Salud Previsional, RUT N° 96.504.160-5, y conforme a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información, interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, por la Decisión sobre Amparos Roles C13710-23 y C13711-23, adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1454 el día 25 de julio de 2024, notificada a su parte a través de correo electrónico con fecha 29 de julio de 2024, mediante Oficio N° E17305, la que acoge los amparos deducidos por don Freddy Ramírez León.

Señala que la resolución de amparo es la siguiente:

I. “Acoger los amparos deducidos por don Freddy Ramírez León, en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente:

a) Entregue a la persona solicitante:

- “Copia de los antecedentes acompañados a este servicio por Isapre Nueva Masvida, que den cuenta de los excedentes pagados directamente a sus afiliados desde el año 2018 en adelante. Informar si dentro de estos antecedentes acompañados por Nueva Masvida se consideran pagos realizados por ésta a Farmacias Ahumada, otras farmacias, ISAPRES u otros prestadores. En su caso, destinatarios de estos pagos de Nueva Masvida, sus fechas y montos totales”.

- Copia de todas las solicitudes y antecedentes acompañados por Isapre Nueva Masvida ante esta Superintendencia, mediante los cuales solicitó se le hiciera pago de los valores que Nueva Masvida habría pagado a título de excedentes a los afiliados de la Ex Isapre Masvida, justificado ello en una eventual subrogación legal u otro título justificante que habrían motivado las resoluciones Exentas N° 744 y N° 748 de 10 de junio de 2022, emanadas de este Servicio”.

Previo a la entrega, en el evento de que la documentación contenga datos personales o sensibles de afiliados, especialmente cualquier mención a la identidad de éstos, patologías o estados de salud físicos y psíquicos, y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ

prestaciones de salud utilizadas por éstos, dichos antecedentes deberán tarjarse. Asimismo, deberán reservarse el número de cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Freddy Ramírez León; al Sr. Superintendente de Salud; y, al tercero interesado.”

Dichas solicitudes fueron respondidas por la Superintendencia de Salud mediante Resoluciones Exentas N° 1237 y N° 1238 de fecha 01 de diciembre de 2023, denegando la entrega de la información solicitada por oposición expresa y fundada de Isapre Nueva MasVida S.A., manifestada en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

La oposición se fundó en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 del mismo cuerpo legal esto es: “*cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico*”.

Frente a tal negativa, el solicitante interpuso los amparos respectivos ante el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ

H. Consejo de la Transparencia, el cual, de conformidad al procedimiento legal respectivo, mediante Oficio N°2617 de 06 de febrero de 2024 confirió traslado a la Superintendencia de Salud quien, por medio del Oficio Ord. N°570 de fecha 12 de febrero de 2024, en términos sucintos, defendió su postura bajo los siguientes argumentos: **i)** Que la denegatoria se funda en la oposición deducida por la empresa, en aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. **ii)** Es información de un tercero, de carácter privado, que obra en su poder, sólo en virtud de sus facultades de fiscalización.

Los argumentos y fundamentos que Isapre Nueva Más Vida S.A. efectuó en sede de amparo para impedir la revelación de la información requerida, de forma resumida, los hacen consistir en primer término, ella no constituye información pública susceptible de ser requerida en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, pues es de origen y naturaleza privada, y en segundo término, en el evento de que se considerare que los antecedentes requeridos constituyen información pública, a su respecto concurre la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

a) La decisión sobre Amparos Roles C13710-23 y C13711-23, acordada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en sesión ordinaria N° 1454 de 25 de julio de 2024, que acoge los amparos deducidos por don Freddy Ramírez León en contra de la Superintendencia de Salud debe necesariamente ser dejada sin efecto, pues fue dictada en contra de norma constitucional y legal expresa, por cuanto la información que ordena sea entregada no es información pública o generada por una entidad pública, sino que constituye información privada, originada por una institución privada, y cuyo titular es una entidad privada, la cual fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Salud en el contexto de sus atribuciones de fiscalización.

Expresa que es relevante lo señalado en el artículo 107 del D.F.L N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, el cual, respecto a la “facultad de fiscalización” que posee la Superintendencia de Salud respecto de las ISAPRES, señala que: *“Corresponderá a la Superintendencia supervigilar y controlar a las instituciones de salud previsional, en los términos que señale este Capítulo, el Libro III de esta Ley y las demás disposiciones legales que sean aplicables, y velar por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley en relación a las Garantías Explícitas en Salud, los contratos de salud, las leyes y los reglamentos que las rigen.”*

Por su parte, el artículo 110 N°3 del ya referido Decreto, señala que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ

“Corresponderán a la Superintendencia, en general, las siguientes funciones y atribuciones: 3.- Fiscalizar a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud.

La Superintendencia impartirá instrucciones que regulen la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros”.

El inciso final del artículo 171 del Decreto en comento señala que *“Las Instituciones serán fiscalizadas por la Superintendencia sin perjuicio de la fiscalización o supervigilancia a que puedan estar sujetas de conformidad con el estatuto jurídico que las regula”.*

A su vez, el artículo 218 del D.F.L ya aludido dispone que: *“Las Instituciones deberán comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios.*

La Superintendencia impartirá instrucciones de general aplicación que regulen los casos, la forma y oportunidad en que deberá cumplirse con esta obligación.

Las Instituciones podrán comunicar, en carácter de reservados, ciertos hechos o informaciones que se refieran a negociaciones aún pendientes que, al difundirse, puedan perjudicar el interés de la entidad.”

Agrega que el artículo 8° inciso segundo de la Carta Fundamental, señala expresamente que *"son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".* Entiende que, lo que el legislador constitucional quiso señalar como público única y exclusivamente los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, como también evidentemente las razones que les sirven de fundamento y la tramitación de sus procedimientos.

Lo anterior no implicaría que toda la información que el Estado reciba a título de fiscalizaciones o reportes entre dentro de la categoría de publicidad establecida en la Constitución. De acuerdo con la reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esta regla determina que el ámbito de aplicación del principio de publicidad alcanza únicamente a *"los actos"; "las resoluciones"; "los fundamentos"; y "los procedimientos".* Al respecto, la magistratura ha resuelto que *"la enumeración contenida en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, no puede sino ser una de carácter taxativo, donde no es posible ampliar el catálogo de situaciones afectas al*



principio de publicidad sin vulnerar la Carta Fundamental”.

b) Señala que la decisión de los Amparos Roles C13710-23 y C13711-23 debe necesariamente ser dejada sin efecto por cuanto la información a la que mediante ella se permite acceder, corresponde a información de carácter sensible y reservada, por lo que se encuentra protegida por la causal de reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Agrega que la decisión de los amparos, luego de incurrir en una primera ilegalidad al considerar sin sustento normativo que la información requerida es pública, incurre en una segunda ilegalidad consistente en no aplicar un precepto legal y desestimar y no convalidar la configuración de una causal de reserva expresamente consagrada en la Ley de Transparencia, contemplada en su artículo 21 N° 2. Es decir, la información solicitada por don Freddy Ramírez León tiene el carácter de información estratégica, sensible y reservada.

Indica que si bien el artículo 5° de la referida Ley establece que aspectos de los actos y resoluciones de la Administración del Estado son públicos, adicionando una presunción de publicidad al respecto, dicha norma ha sido declarada inaplicable por inconstitucional en un sin número de requerimientos deducidos ante el Excmo. Tribunal Constitucional, por cuanto claramente excede con creces lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, es claro que la publicidad declarada por dicha norma no es absoluta, pues, de acuerdo con lo señalado en el mismo artículo, existen excepciones, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal.

En este contexto, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia, existe la posibilidad de negar ya sea absoluta o parcialmente cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Agregan que, con la divulgación de la información a la que pretende tener acceso el solicitante, se afectan los derechos económicos y comerciales de Isapre Nueva Masvida S.A. así como de las contrapartes de los convenios y, por ende, en los derechos y beneficios de los afiliados de la Isapre. Dicho en otras palabras, no se trata en la especie de información que su representación no quiera dar a conocer por mero capricho, sino que se está en presencia de información, estrategias comerciales relativas a valores de prestaciones, datos desagregados, convenios con prestadores , mucha



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ

información la cual está sujeta a cláusulas de confidencialidad y que de hacerse pública, podrían afectar la competitividad de la ISAPRES como el nivel de competencia en el mercado de las ISAPRES, prestadores y farmacias. Dicha información, altamente sensible, dice relación con estrategias para optimizar los beneficios hacia los afiliados, dentro del giro de la Isapre y cuya divulgación, por ende, perjudicaría a ella, sus contrapartes comerciales, a sus afiliados y beneficiarios, prestadores y farmacias.

En síntesis, señala que las ilegalidades denunciadas son:

1. La información que el CPLT ha ordenado entregar no constituye información pública susceptible de ser requerida en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, pues es de origen y naturaleza privada, y
2. En el evento de que se considerare que los antecedentes requeridos constituyen información pública, a su respecto concurre la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

Y, en resumen, los derechos afectados por dichas ilegalidades son:

- a) El derecho de Isapre Nueva Mas Vida S.A. a desarrollar su actividad económica específica (en la que consiste su objeto preciso), de conformidad a las normas legales que la rigen.
- b) El derecho de propiedad de Isapre Nueva Mas Vida S.A. sobre los antecedentes relativos a la gestión que realiza.
- c) Los derechos económicos y comerciales de terceros que contrataron con ISAPRES Nueva Masvida S.A. sobre los antecedentes relativos a las prestaciones y beneficios, así como las condiciones en que se otorgaron.

Segundo: Informando don David Ibaceta Medina, por el Consejo para la Transparencia, solicita el rechazo del reclamo por las siguientes alegaciones.

En cuanto a fondo del reclamo expresa que teniendo en consideración la especificidad de la parte petitoria del reclamo de autos, y el tenor de los fundamentos de derecho en que se apoya, el debate se centra únicamente en determinar si el consejo obró conforme a derecho, al acoger el amparo deducido, ordenando la entrega de la información señalada.

Sobre la primera causal invocada, precisa que lo solicitado obra en poder de la Superintendencia de Salud, en el marco del cumplimiento de sus funciones públicas de fiscalización, debiéndose a su vez, tener presente lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que



utilicen.

Que, en este contexto, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, de salud, fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, en adelante DFL N°1, en sus artículos 107 y 171, inciso 4°, establece que las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) serán fiscalizadas por la Superintendencia de Salud sin perjuicio de la supervigilancia a que puedan estar sujetas de conformidad con el estatuto jurídico que las regula.

En tal sentido, y para efectos de ejercer debidamente su rol fiscalizador, el artículo 110 de la citada normativa faculta al organismo para acceder a los antecedentes que allí describe respecto de las entidades que supervigila.

A su vez, el artículo 218° del cuerpo legal precedentemente citado, preceptúa que *“Las Instituciones deberán comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios. La Superintendencia impartirá instrucciones de general aplicación que regulen los casos, la forma y oportunidad en que deberá cumplirse con esta obligación. Las Instituciones podrán comunicar, en carácter de reservados, ciertos hechos o informaciones que se refieran a negociaciones aún pendientes que, al difundirse, puedan perjudicar el interés de la entidad”*.

Estima que, en el presente caso, y frente a las argumentaciones de la requerida, en orden a que la información pedida fue remitida en el contexto de una fiscalización, resalta que lo anterior es una manifestación del ejercicio de su facultad legal de supervisión y control que le compete respecto de las Instituciones de Salud Previsional, en las que además solo contempla una reserva respecto de negociaciones pendientes, lo que no acontece en la especie.

En este mismo sentido, señala que el inciso 2° del Artículo 10 de la LT, preceptúa que: *“El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”*.

Lo anterior, se encuentra, además, reforzado por la “presunción de publicidad” contenida en el Art. 11 letra c) de la misma ley, que establece: *“... toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”*.



Finalmente, agrega que no corresponde que la reclamante se asile en sentencias pronunciadas por el Excmo. Tribunal Constitucional que cita en su libelo para sustentar sus alegaciones, por cuanto éstas no se pueden aplicar por analogía al caso sub lite; primero, porque la inaplicabilidad por inconstitucionalidad se juzga en razón de la aplicación de las normas al caso concreto; y, segundo, porque en conformidad a lo previsto en el Artículo 92 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional:

“La sentencia que declare la inaplicabilidad solo producirá efectos en el juicio en que se solicite”. En consecuencia, las sentencias citadas por la reclamante solo tuvieron efecto en las gestiones judiciales correspondientes a esos casos, y dado que en el presente caso no existe inaplicabilidad declarada por el Excmo. Tribunal, esta ltma. Corte no tiene impedimento jurídico alguno para aplicar lo dispuesto en el Art. 5° y 10 de la LT.

En cuanto a lo alegado como segunda causal por Isapre Nueva Mas Vida, de afectar derechos comerciales y económicos de la Isapre, lo responde separando distintos contenidos; el primero, en orden a la existencia de cláusulas de confidencialidad. Al respecto, precisa que no es admisible que prime el secreto establecido en virtud de cláusulas contractuales de confidencialidad, pues ello infringe el principio de jerarquía normativa y de fuerza obligatoria de la Constitución, ya que un contrato no puede estar sobre lo dispuesto en la ley, ni mucho menos, en la Carta Fundamental, en cuyo inciso 2° del Art. 8, expresamente se dispone que la reserva o secreto debe ser establecida en virtud de ley de quórum calificado.

En segundo término, sobre la alegación de la afectación concreta y efectiva de sus derechos económicos y sociales, señaló que tanto la jurisprudencia administrativa de ese Consejo, como la jurisprudencia judicial, tanto de esta ltma. Corte, como de la Excma. Corte Suprema, han señalado sistemáticamente que para dar por configurada una causal de secreto o reserva de aquellas que contiene el Art. 21 de la LT, no resulta suficiente la sola invocación o referencia a dichas causales, en términos meramente formales, sino que es menester determinar si la publicidad de la información de que se trata, afecta o no algunos de los bienes jurídicos previstos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, siendo, por tanto, necesario que el interesado que invoca la causal de secreto o reserva, acredite ante el Consejo para la Transparencia la real afectación del bien jurídico protegido, no bastando en este punto una mera referencia a la afectación de los derechos de la recurrente.

Este examen de afectación para ponderar el daño que la publicidad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ

puede provocar deriva de la promulgación de la Ley N° 20.050, Ley de Reforma Constitucional, que incorporó el nuevo Art. 8° de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 8.º El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Estima que, con el nuevo Art. 8° de la Constitución, ubicado dentro del Capítulo I, denominado "Bases de la Institucionalidad", se consagró con el máximo nivel normativo la publicidad de los actos de la administración, estableciendo que esta consagración solo puede limitarse a través de una Ley de Quórum Calificado, fundada en que:

- a) La publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano,
- b) La publicidad afectare los derechos de las personas,
- c) La publicidad afectare la seguridad de la Nación, y
- d) La publicidad afectare el Interés Nacional.

Lo sostenido por la Isapre, no se aviene con lo dispuesto en el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución, que requiere para que ceda el principio general de publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva alegado, que deba "afectarse" algunos de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona, por lo que no basta con que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva previstas en el Art. 21 de la Ley de Transparencia, sino que, además de adecuarse a algunas de las hipótesis del Art. 8° de la Constitución, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen. Sin embargo, la Isapre, en sede administrativa, no explicó en forma pormenorizada cómo su comunicación puede afectar su ventaja competitiva en el mercado.

Con todo ello, afirma que al esgrimir la Isapre sólo alegaciones genéricas en el procedimiento administrativo, sin especificar y acreditar los perjuicios de entregar la información solicitada, invocando, además, sólo riesgos hipotéticos y remotos, carentes de prueba, es que no resulta plausible concluir que se genere afectación a alguna de sus derechos comerciales o económicos. Por lo tanto, con la entrega de la información solicitada, no se



configura la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Por último, señala que no procede se condene en costas al Consejo, toda vez que es el órgano obligado a pronunciarse sobre una controversia jurídica suscitada entre un solicitante de información, un órgano del Estado, y eventualmente, un tercero interesado, y que en tal posición tiene motivo plausible para litigar, lo que determina que no puede ser condenado en costas.

Tercero: Que el objeto central de lo expuesto por las partes de este reclamo y que se debe resolver, es determinar si lo decidido por el Consejo para la transparencia, pueda ser considerado ilegal, puesto que, a juicio de la reclamante, la información que ha ordenado entregar no constituye información pública susceptible de ser requerida en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, pues es de origen y naturaleza privada, añadiendo que la oposición se fundó en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la LT, esto es: "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

Cuarto: Que, para iniciar el razonamiento pertinente, es oportuno atender a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, el que dispone que: "son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

De la norma recién transcrita, se deriva que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen.

Es un principio constitucional, al cual deben someterse las normas jurídicas de rango inferior, pero que permite excluir, solo como excepción, aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los Derechos de las Personas, la Seguridad de la Nación o el Interés Nacional.

Quinto: Que, en consecuencia, y atendido los fundamentos del reclamo se debe dilucidar si se está en presencia de información pública y, en caso de ostentar tal calidad, opera a su respecto, la excepción contenida



en el artículo 21 inc. 2 de la Ley de Transparencia.

En ese sentido, corresponde analizar las alegaciones de la reclamante, en orden a que la información solicitada no es pública.

Para ello, se debe tener en consideración que las Instituciones de Salud Previsional cumplen un rol público, una función social, teniendo como función la materialización del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19, N° 9 de la Constitución Política, en un plano análogo al de su titular originario, el Estado.

Atendiendo a esta función social, es que dichas instituciones se encuentran reguladas y sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Salud, la que debe supervisar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria exigida.

Se estableció que los convenios objeto del reclamo de ilegalidad, fueron requeridos por tal órgano fiscalizador, justamente en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, específicamente el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469.

Concordante con lo anterior, en su actuación puede legítimamente acceder a las operaciones, archivos, libros y documentos de las instituciones de salud y requerir de ellas o de sus administradores, asesores y otros similares, todos los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios.

Por otra parte, la misma normativa obliga a las instituciones de salud a comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios.

Como se ha señalado, conforme lo prescriben el artículo 8 de la Constitución Política de la República y los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, no sólo son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sino que también lo son sus fundamentos y los procedimientos que utilicen en el cumplimiento de su labor, siendo a su vez públicos los documentos que sirvan a dichas instituciones para dictar sus actos y resoluciones, y en general, toda información que obre en poder de los órganos de la Administración.

Así, resulta que la información fue requerida por un órgano público, en virtud de sus facultades legales y por ende obra en su poder, teniendo en consecuencia un carácter público.

Sexto: En cuanto a la causal de reserva, el artículo 21 de la citada ley



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ

establece que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, es en lo pertinente: *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*.

En una lógica derivación procesal era el reclamante quien, tenía la carga de acreditar el riesgo para sus derechos comerciales y económicos, no de una manera eventual, sino de modo efectivo, el daño causado, lo que claramente no realizó.

Ello, además, en estricta vinculación con lo dispuesto en el artículo 8 inc. 2 de la Constitución Política.

Por lo que, para resultar comprendido en la hipótesis de excepción aludida, debía existir afectación a un bien jurídico determinado, hecho que debió ser debidamente comprobado, lo que, en su oportunidad, no fue realizado.

Séptimo: Es relevante reconocer que el derecho de acceso a la información, entre otras finalidades, permite el ejercicio de un control ciudadano sobre las instituciones públicas, cuestión que cobra una relevancia aún mayor respecto de las instituciones de salud previsional, debido al rol social que cumplen en la materialización del derecho a la protección de la salud.

Así, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, cualquier persona puede requerir de un órgano público, los documentos y/o antecedentes que obran en poder de éste, y acreditar si el regulador ha ejercido correctamente sus competencias.

Una adecuada y oportuna fiscalización de la normativa por parte del regulador no sólo resulta ser un deber público para el órgano estatal, sino que es una garantía para el cotizante, para el correcto funcionamiento del sistema, e incluso, para la propia Isapre, en cuanto evita, por ejemplo, que un actor que no cumpla con la normativa legal y reglamentaria pueda competir deslealmente en el sistema.

Octavo: Que, no existiendo ilegalidad en la actuación del Consejo reclamado, no ha podido producirse afectación a los derechos constitucionales alegados.

Noveno: Que, en consecuencia, la información cuya publicidad fue ordenada por el Consejo de la Transparencia en su decisión de Amparo Roles C13710-23 y C13711-23, resulta plenamente legal, por lo que no cabe



sino rechazar el reclamo de ilegalidad presentado por Isapre NUEVA MASVIDA S.A.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 28 de la Ley N°20.285, se declara que **se rechaza** el reclamo de ilegalidad interpuesto por doña Macarena Bravo Vega en representación de la Isapre Nueva Masvida S.A..

Transcribese al Consejo de Transparencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.

No firma el Ministro (s) señor De la Noi, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

Contencioso Administrativo N° 547-2024



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Inelie Duran M. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKLUXTUXSSQ